

SESIÓN ORDINARIA 6167

Acta de la sesión ordinaria número **SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE** de la Junta Directiva Nacional, celebrada a través de la modalidad de videoconferencia en el sistema Microsoft Teams, en forma interactiva, simultánea e integral a las **SIETE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL JUEVES CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO**. La convocatoria a la presente sesión se efectuó de conformidad con lo dispuesto en la ley. Asistentes: el presidente, Sr. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja; el vicepresidente, Sr. Eduardo Navarro Ceciliano; la directora, Sra. Iliana González Cordero; la directora, Sra. Clemencia Palomo Leitón; el director, Sr. Raúl Espinoza Guido; la directora, Sra. Shirley González Mora; la directora, Sra. Nidia Solano Brenes.

Además, asistieron: la gerente general corporativa, Sra. Gina Carvajal Vega el subgerente general de Operaciones, Sr. Daniel Mora Mora; el subgerente general de Negocios, Sr. Mario Roa Gutiérrez; el director corporativo de Riesgo, Sr. Maurilio Aguilar Rojas; el auditor general a. i., Sr. Marco Chaves Soto; el secretario general, Sr. Juan Luis León Blanco; y el asesor legal, Sr. Manuel Rey González.

ARTÍCULO 1

Inicia la sesión.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja hace la comprobación del quórum y confirma que se encuentran todos los miembros presentes.

Se procede a conocer el orden del día:

1.- Aprobación del orden del día.

2.- Aprobación del acta.

3.- Asuntos Informativos.

3.1.- El Sr. Steven Oreamuno Herra remite el Informe final de gestión como vocal de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, correspondiente al periodo del 16 de noviembre del 2022 al 15 de noviembre del 2024.

3.2.- La Sra. Shirley González Mora remite el Informe final de gestión como vicepresidenta de la Junta Directiva de Popular Valores Puesto de Bolsa, correspondiente al periodo del 23 de enero de 2024 al 15 de noviembre de 2024.

3.3.- El Sr. Raúl Espinoza Guido remite el Informe final de gestión como presidente de la Junta Directiva de Popular Valores Puesto de Bolsa, correspondiente al periodo del 22 de diciembre 2021 al 15 de noviembre de 2024.

3.4.- El Sr. Alvaro Ramírez Sancho remite el Informe final de gestión, como secretario de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, durante el periodo del 23 de julio de 2024 al 15 de noviembre 2024.

3.5.- El Sr. Luis Roberto Ramírez Vega remite el Informe final de gestión como vocal I de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo del 28 de febrero al 15 de noviembre de 2024.

3.6.- La Sra. Adriana Céspedes Camacho remite el Informe final de gestión como tesorera de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre del 2022 y el 15 de noviembre del 2024.

3.7.- El Sr. Marvin Sánchez Rodríguez remite el Informe final de gestión como vocal II de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo del 29 de noviembre del 2022 al 15 de noviembre del 2024.

3.8.- La Sra. Margarita Fernández Garita remite el Informe final de gestión como vicepresidenta de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre del 2022 y el 15 de noviembre del 2024.

3.9.- La Sra. Silvia Morales Jiménez remite el Informe final de gestión como fiscal de la Junta Directiva de Popular Valores, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre del 2024.

3.10.- El Sr. Eduardo Navarro Ceciliano remite el Informe final de gestión como presidente de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de enero y el 15 de noviembre del 2024.

3.11.- La Sra. Kimberly Campbell McCarthy, remite el Informe final de gestión como tesorera de la Junta Directiva de Popular Valores Puesto de Bolsa, S. A., correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de noviembre del 2022 y el 15 de noviembre del 2024.

3.12.- El Sr. Alfonso Molina Rodríguez, remite el Informe final de gestión como fiscal de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre del 2024.

3.13.- El Sr. Randall Mata Castillo remite el Informe final de gestión como vocal III de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre del 2024.

3.14.- El Sr. Victor Mora Schlager remite el Informe final de gestión como secretario de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre del 2024.

4.- Asuntos de Presidencia.

5.- Asuntos de directores.

6.- Seguimiento Plan Estratégico Conglomerar y Planes de Acción.

7.- Informes y seguimiento de dependencias de Junta Directiva.

8.- Asuntos Resolutivos:

8.1. Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

8.2. Secretaría de la Junta Directiva Nacional.

8.3.- Comités de Apoyo.

Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones.

8.3.1.- El Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones remite, para aprobación, el Cuadro de Mando Integral CMI propuesto para evaluar el desempeño de la Auditoría Interna en el periodo 2025. (Ref.: Acuerdo CCNR-23-ACD-151-2024-Art-3)

8.3.2.- El Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones remite, para aprobación, el Cuadro de Mando Integral del Fodemipyme.

Comité Corporativo de Riesgo.

8.3.3.- El Comité Corporativo de Riesgo traslada, para aprobación, la propuesta de modificación del apartado "8. Fórmulas de capacidad de pago" de la *Metodología estándar de medición de la capacidad de pago etapa de aprobación, seguimiento y arreglos de pago* (versión XIV), con el propósito de aplicar los diversos cambios normativos que ha venido implementando la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) durante los últimos años en lo referente a la conformación de los Grupos de Interés Económico (GIE). (Ref.: Acuerdo CCR-21-ACD-219-2024-Art-8)

8.4.- Asuntos de la Gerencia General Corporativa.

8.4.1.- La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, remite, para aprobación, la actualización de la Política de Seguridad y Ciberseguridad, con respecto a lo que establece la ISO 272002:2022. (Ref.: Oficio GGC-1319-2024)

8.5.- Otras dependencias internas o externas.

8.5.1.- El Sr. Ricardo Azofeifa Castillo, director jurídico corporativo, se refiere al oficio DIRJC-1222-2024 dirigido a la Sra. Dalianela Redondo Cordero, gerente general de Popular Fondos de Inversión, en relación con los alcances y responsabilidades en relación con el criterio emitido por la Procuraduría General de la República sobre la responsabilidad de la controladora y su incidencia en las subsidiarias. (Ref.: Oficio DIRJC-1222-2024)

8.6.- Sociedades Anónimas.

8.7.- Asamblea de Cuotistas.

9.- Asuntos Varios.

El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano pregunta si el aumento salarial se incorporará en Asuntos de Gerencia o en la parte de Subsidiarias propiamente.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja responde que en Asuntos de la Gerencia.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja somete a aprobación el orden del día con la inclusión propuesta.

Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo y su firmeza.

Al respecto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

“1. Incluir, en el apartado de Asuntos de Gerencia, el tema del ajuste salarial correspondiente al segundo semestre 2024.

2. Aprobar el orden del día para la sesión ordinaria 6167 celebrada el 5 de diciembre de 2024”. (1324)

ARTÍCULO 2

3.1.- El Sr. Steven Oreamuno Herra remite el Informe final de gestión como vocal de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, correspondiente al periodo del 16 de noviembre del 2022 al 15 de noviembre del 2024.

El secretario general Sr. León Blanco indica que se verán informes de final de gestión de directores de las diversas Sociedades, comprendiendo el periodo entre el 16 de noviembre 2022 y el 15 de noviembre 2024.

Las siguientes personas han presentado el Informe: el Sr. Steven Oreamuno Herra de Popular Valores; la Sra. Shirley González Mora, como vicepresidenta de Popular Valores; el Sr. Raúl Espinoza Guido, como presidente de la Junta Directiva de Popular Valores; el Sr. Álvaro Ramírez Sancho, como secretario de la Junta Directiva de Popular Valores; el Sr. Roberto Ramírez Vega, de la Junta Directiva de Popular Pensiones; la Sra. Adriana Céspedes Camacho, tesorera de la Junta Directiva de Popular Pensiones; el Sr. Marvin Sánchez Rodríguez, de la Junta Directiva de Popular Pensiones; la Sra. Margarita Fernández Garita, vicepresidenta de la Junta Directiva de Popular Pensiones; la Sra. Silvia Morales Jiménez; fiscal de la Junta Directiva de Popular Valores; el Sr. Eduardo Navarro Ceciliano, presidente de la Junta Directiva de Popular Pensiones; la Sra. Kimberly Campbell Mc Carthy, tesorera de la Junta Directiva de Popular; el Sr. Alfonso Molina Rodríguez, fiscal de la Junta Directiva de Popular Pensiones; el Sr. Randall Mata Castillo, de la Junta Directiva de Popular Pensiones; y el Sr. Víctor Mora Schlager, secretario de la Junta Directiva de Popular Pensiones.

El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano indica que la propuesta es, estando constituidos como Asamblea de Accionistas, actuando en sus funciones propias, dar por conocido el informe de cada directivo.

Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo y su firmeza.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de Popular Valores Puesto de Bolsa S. A., acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión del Sr. Steven Oreamuno Herra como vocal de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, correspondiente al periodo del 16 de noviembre del 2022 al 15 de noviembre del 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1304)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 3

3.2.- La Sra. Shirley González Mora remite el Informe final de gestión como vicepresidenta de la Junta Directiva de Popular Valores Puesto de Bolsa, correspondiente al periodo del 23 de enero de 2024 al 15 de noviembre de 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de Popular Valores Puesto de Bolsa S. A., acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido Informe final de gestión de la Sra. Shirley González Mora como vicepresidenta de la Junta Directiva de Popular Valores Puesto de Bolsa, correspondiente al periodo del 23 de enero de 2024 al 15 de noviembre de 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1305)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4

3.3.- El Sr. Raúl Espinoza Guido remite el Informe final de gestión como presidente de la Junta Directiva de Popular Valores Puesto de Bolsa, correspondiente al periodo del 22 de diciembre 2021 al 15 de noviembre de 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de Popular Valores Puesto de Bolsa S. A., acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión del Sr. Raúl Espinoza Guido como presidente de la Junta Directiva de Popular Valores Puesto de Bolsa, correspondiente al periodo del 22 de diciembre 2021 al 15 de noviembre de 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1306)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5

3.4.- El Sr. Alvaro Ramírez Sancho remite el Informe final de gestión, como secretario de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, durante el periodo del 23 de julio de 2024 al 15 de noviembre 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de Popular Valores Puesto de Bolsa S. A., acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión del Sr. Alvaro Ramírez Sancho como secretario de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, durante el periodo del 23 de julio de 2024 al 15 de noviembre 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1307)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6

3.5.- El Sr. Luis Roberto Ramírez Vega remite el Informe final de gestión como vocal I de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo del 28 de febrero al 15 de noviembre de 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A. acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión del Sr. Luis Roberto Ramírez Vega como vocal I de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo del 28 de febrero al 15 de noviembre de 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1308)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 7

3.6.- La Sra. Adriana Céspedes Camacho remite el Informe final de gestión como tesorera de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre del 2022 y el 15 de noviembre del 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A. acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión de la Sra. Adriana Céspedes Camacho como tesorera de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre del 2022 y el 15 de noviembre del 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE". (1309)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 8

3.7.- El Sr. Marvin Sánchez Rodríguez remite el Informe final de gestión como vocal II de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo del 29 de noviembre del 2022 al 15 de noviembre del 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A. acuerda por unanimidad:

"Dar por conocido Informe final de gestión del Sr. Marvin Sánchez Rodríguez como vocal II de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo del 29 de noviembre del 2022 al 15 de noviembre del 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE". (1310)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 9

3.8.- La Sra. Margarita Fernández Garita remite el Informe final de gestión como vicepresidenta de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre del 2022 y el 15 de noviembre del 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A. acuerda por unanimidad:

"Dar por conocido el Informe final de gestión de la Sra. Margarita Fernández Garita como vicepresidenta de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre del 2022 y el 15 de noviembre del 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE". (1311)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 10

3.9.- La Sra. Silvia Morales Jiménez remite el Informe final de gestión como fiscal de la Junta Directiva de Popular Valores, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre del 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de Popular Valores Puesto de Bolsa S. A., acuerda por unanimidad:

"Dar por conocido el Informe final de gestión de la Sra. Silvia Morales Jiménez como fiscal de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, durante el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE". (1312)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 11

3.10.- El Sr. Eduardo Navarro Ceciliano remite el Informe final de gestión como de la Junta Directiva de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A., correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de enero y el 15 de noviembre del 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A. acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión del Sr. Eduardo Navarro Ceciliano como presidente de la Junta Directiva de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A., durante el periodo del 25 de enero al 15 de noviembre 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1313)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 12

3.11.- La Sra. Kimberly Campbell McCarthy, remite el Informe final de gestión como tesorera de la Junta Directiva de Popular Valores Puesto de Bolsa, S. A., correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de noviembre del 2022 y el 15 de noviembre del 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de Popular Valores Puesto de Bolsa S. A., acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión de la Sra. Kimberly Campbell McCarthy como tesorera de la Junta Directiva de Popular Valores, Puesto de Bolsa, durante el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1314)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 13

3.12.- El Sr. Alfonso Molina Rodríguez, remite el Informe final de gestión como fiscal de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre del 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A. acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión del Sr. Alfonso Molina Rodríguez como fiscal de la Junta Directiva de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A., durante el periodo del 29 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1315)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 14

3.13.- El Sr. Randall Mata Castillo remite el Informe final de gestión como vocal III de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre del 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A. acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión del Sr. Randall Mata Castillo como fiscal de la Junta Directiva de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A., durante el periodo del 29 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1316)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 15

3.14.- El Sr. Victor Mora Schlager remite el Informe final de gestión como secretario de la Junta Directiva de Popular Pensiones, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre del 2024.

La Junta Directiva Nacional, actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A. acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el Informe final de gestión del Sr. Víctor Mora Schlager como fiscal de la Junta Directiva de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A., durante el periodo del 29 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre 2024.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12 inciso e) de la Ley 8292 General de Control Interno y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión No. D-1-2005-CO-DFOE”. (1317)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 16

4.- Asuntos de Presidencia.

El secretario general Sr. León Blanco indica que no hay.

5.- Asuntos de directores

El presidente Sr. Sánchez Sibaja indica que no hay tampoco.

ARTÍCULO 17

8.3.1.- El Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones remite, para aprobación, el Cuadro de Mando Integral propuesto para evaluar el desempeño de la Auditoría Interna en el periodo 2025. (Ref.: Acuerdo CCNR-22-ACD-151-2024-Art-3)

Al ser las **siete horas con catorce minutos**, inicia su participación virtual la Sra. Ericka Rivera Pla, funcionaria de la Auditoría Interna.

El auditor general a. i. Sr. Chaves Soto saluda e indica que le acompaña la Sra. Rivera Pla, de Aseguramiento de la Calidad en su dependencia, para presentar el Cuadro de Mando Integral 2025.

Recuerda que el Cuadro de Mando Integral de la Auditoría se ajusta a todo lo establecido por el Banco en esta materia, con base en cuatro perspectivas, de manera que se desarrollará cada una y aclara que cada una posee llaves de pago institucional que también les aplican como Auditoría.

En este sentido, bajo las cuatro perspectivas, que son gestión, eficiencia operativa, experiencia del cliente y experiencia del colaborador. Se establecieron los pesos respectivos para el 2025.

En cuanto a la perspectiva de *Gestión*, se dejaron bien definidos dos indicadores, los cuales también se convierten en llaves de pago. Por un lado, está cumplir con el plan de trabajo con grado igual o mayor al 90% y cumplir con el avance del Plan Estratégico 2025, que debe ser mayor o igual al 90%.

Si bien es la perspectiva de gestión, son llaves de pago y si no se cumplen, el resto se da por incumplido en el Cuadro de Mando Integral.

Se definieron otros indicadores, que son *Incrementar el valor agregado de la Auditoría*, por cumplirse al 100% y está asociado a los estudios de Auditoría, lo cual tiene como objetivos evaluar la eficiencia operativa y la rentabilidad. Recuerda que este cuadro de mando integral está alineado con el Plan Anual Operativo, el cual tenía estudios específicos en esta materia, alineado también con el Plan Estratégico de la Auditoría.

El siguiente indicador es de *Fortalecer el cumplimiento* y está asociado a todos los indicadores trimestrales del área de cumplimiento normativo. Al respecto, se emitirán cuatro informes trimestrales, con base en los estudios programados para el 2025 en materia de cumplimiento normativo y su aporte en rentabilidad a la Institución.

El siguiente indicador es el *Fortalecer la relación con parte interesadas*, sobre lo cual se trata de las reuniones mensuales con todos los miembros de la Junta Directiva Nacional y de la Gerencia General Corporativa. Se espera cumplir con periodicidad mensual y se requieren al menos 12 reuniones con las áreas interesadas.

Se ha referido a los indicadores de la perspectiva de gestión propiamente.

En cuanto a los indicadores de *Eficiencia operativa*, se establecieron dos, por un lado, la *Coordinación estratégica de la Auditoría Conglomerada*, en materia del cumplimiento de acuerdos. Como parte de lo establecido, se debe coordinar con las demás Auditorías del Grupo y, actualmente, se debe incorporar un nuevo auditor en dichas reuniones, que está nombrado interinamente en la Sociedad de Servicios Compartidos, y se debe mantener la atención de los acuerdos asociados a dichas reuniones en el 100%.

El otro indicador es de *Evaluación de la Calidad de la Auditoría Interna*, donde la calificación debe ser una autoevaluación con una nota al menos del 95%.

En cuanto a los indicadores de *Experiencia de Cliente*, se establecieron dos indicadores, por un lado, *Nivel de satisfacción del jerarca*, lo cual está asociado a los resultados de la encuesta de percepción por parte de los miembros de la Junta Directiva, donde la meta es lograr una nota igual o mayor al 80%. El otro indicador es el *Nivel de satisfacción de auditados*, donde se valora la encuesta de percepción de riesgo luego de cada estudio emitido por su Auditoría a cada instancia auditada; el resultado debe ser mayor o igual al 90%.

A propósito de la última perspectiva, de *Experiencia del Colaborador*, se definió como indicador *Fortalecer el perfil profesional*, sobre lo cual se desea lograr el plan de capacitación al menos en el 80%, considerando que el plan de capacitación está personalizado para cada auditor con énfasis especial en las nuevas tendencias de Auditoría, tanto para cumplir el Plan Anual de Trabajo como el Plan Estratégico de su instancia.

Ha finalizado la presentación respectiva y queda pendiente a consultas.

La directora Sra. Palomo Leitón señala que le parece muy bien, pero tiene una observación, pues la nota mínima en evaluación del jerarca es de 80, pero en los otros casos se ponen notas más exigentes, como 90 o 95, por tanto, se podría replantear para un próximo CMI y que sea más retador, máxime que es la evaluación realizada por la Junta Directiva Nacional. Es su recomendación a futuro.

El auditor general a. i. Sr. Chaves Soto aclara que así lo tienen proyectado, pero se está analizando el último resultado obtenido en la anterior evaluación y fue de 76, entonces, se llevó a 80, para irlo mejorando gradualmente. La idea es llevar el indicador a una nota mucho más elevada, está de acuerdo con la observación.

El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano indica que la propuesta de acuerdo es: *Aprobar el Cuadro de Mando Integral, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal sobre el sistema de evaluación del desempeño basado en el cuadro de mando integral y en el balance de desarrollo personal el artículo 36 inciso a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Técnicos y Comisiones del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Instructivo de Proceso Gestionar un Sistema de Evaluación del Desempeño basado en el CMI y BDP y los Lineamientos y Acciones Estratégicas Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal período 2023-2025.*

Todos los directores presentes indican su conformidad con la propuesta de acuerdo.

Al respecto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

“Aprobar el Cuadro de Mando Integral propuesto para evaluar el desempeño de la Auditoría Interna en el periodo 2025.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal sobre el sistema de evaluación del desempeño basado en el cuadro de mando integral y en el balance de desarrollo

personal, el artículo 36 inciso a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Técnicos y Comisiones del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Instructivo de Proceso Gestionar un Sistema de Evaluación del Desempeño basado en el CMI y BDP y los Lineamientos y Acciones Estratégicas Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal periodo 2023-2025". (1318)

ACUERDO FIRME.

Al ser las **siete horas con veinticinco minutos**, finaliza su participación virtual la Sra. Ericka Rivera Pla, funcionaria de la Auditoría Interna.

ARTÍCULO 18

8.3.2.- El Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones remite, para aprobación, el Cuadro de Mando Integral del Fodemipyme.

Al ser las **siete horas con veinticinco minutos**, inicia su participación virtual el director ejecutivo del Fodemipyme, Sr. Mauricio Arias Ramírez.

El director ejecutivo del Fodemipyme Sr. Arias Ramírez saluda e indica que presentará el Cuadro de Mando Integral de su dependencia.

Detalla que, como antecedentes importantes, de previo a referirse a los indicadores, el tema se alineó con el Plan de Trabajo aprobado por esta Junta Directiva 2023-2025, cuando se autorizó el redimensionamiento del Fodemipyme en cuanto a capital humano, cuando se validaron los indicadores para ir midiendo en función del reforzamiento.

El CMI ha sido construido con base en la metodología brindada por la Planificación Estratégica y tiene el visto bueno, siguiendo los lineamientos institucionales, pero bajo la consideración de que el Fodemipyme es una dependencia especial que cumple con los objetivos de la Ley 8262, también, alineado con el oficio PEC-134-2024, donde se indica que las dependencias especiales y la Alta Gerencia presentan el Cuadro de Mando Integral previamente al Comité y directamente al Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones.

Por otro lado, los artículos 10, 11 y 12 de la Ley mencionada facultan a esta Junta Directiva para ejercer o resolver lo referente al Fodemipyme, en virtud de ser una dependencia especial.

En cuanto a los lineamientos, el Fodemipyme se alinea al Cuadro de Mando Institucional, sin perder de vista el objetivo o el propósito de creación según la Ley indicada.

En esta materia y del CMI, se alinearon a la perspectiva de procesos y en el ámbito institucional, a contribuir con el desarrollo sostenible del país, mediante la implementación que generen las estrategias para equilibrio económico, construcción social y el ambiente, con gobernanza ética y transparente.

Habiendo presentado los alineamientos, procede a referirse a los indicadores por áreas. En cuanto a crédito, el primer indicador es la colocación para el 2025 de ₡10.000 millones con un peso del 25%; el segundo indicador es la mora mayor a 90 días, que no puede sobrepasar el 8% de acuerdo con el indicador que garantice la sostenibilidad patrimonial del Fodemipyme.

Recuerda que el Fodemipyme no es una dependencia fiscalizada ni ajustada al Supervisor o al Regulador, esto tiene un peso del 15%.

Algunas limitaciones las debe mencionar para avanzar con el indicador de forma satisfactoria, lo cual ha sido complicado y radica en tiempos de respuesta otorgados por el MEIC para otorgar la condición pyme, haciendo la salvedad de que no pueden atender a nadie que no tenga ese requerimiento.

También, existe una dependencia directa de las vinculaciones de personas jurídicas y el tiempo para la vinculación de estas en muchos casos se extiende entre 3 o 4 semanas.

Además, existe dependencia directa de oficinas comerciales para la apertura de productos o integración, que suma tiempo.

Así las cosas, para el 2025, se iniciará un proyecto de digitalización del proceso de crédito del Fodemipyme.

En materia del Fondo de Avaluos y Garantías, el crecimiento no puede ser antojadizo, sino muy regulado porque intervienen variables muy técnicas. Desea crecer ₡80.000 millones en cuanto al crédito movilizado, pero no lo puede lograr porque tiene dependencia directa, primero del patrimonio, después, de los índices de honramiento, de los rendimientos generados por el portafolio de inversiones que hoy está en un orden de apalancamiento de 2,41 veces, para un patrimonio de ₡2.325 millones, con riesgo vivo de ₡53.606, lo cual induce a ser muy cautos en los crecimientos proyectados de este Fondo.

Se registran crecimiento muy acelerados desde el 2023, por ₡25.790 millones, a ₡53.606 millones, o sea, se trata del 108% de crecimiento y este 2024 cerrará con crecimientos muy superiores a dicho porcentaje, lo cual induce a la cautela mayor en el crédito movilizado a través de avales otorgados, aunado esto a que las tasas pasivas se ganan por medio del portafolio del Fodemipyme y presentan un escenario a la baja.

Se busca un crecimiento técnico y administrado, además, se debe esperar por los efectos que genere la migración de la política recién aprobada de estimaciones, hacia reservas técnicas.

En cuanto a servicios de desarrollo empresarial, la cantidad de beneficiarios que se estima atender asciende a 225 para el próximo año y 5 proyectos. Existe la condicionante de que se está en el último año contractual, por tanto, se debe realizar un nuevo proceso licitatorio, el cual puede sufrir contingencias, aunque de su parte deseara tenerlo operando, o sea, puede haber apelaciones y otros similares en estos procesos según la regulación.

En síntesis, se ha referido a los cinco indicadores. En cuanto a los objetivos, se han formalizado ₡10.000 millones (25%), la mora menor o igual a 90 está en 8% (15%); el crédito movilizado por el fondo de avales ha sido por ₡25.000 millones (25%), 225 beneficiarios y 5 proyectos de organizaciones de la Economía Social (25%).

En este sentido, procede a leer a la propuesta de acuerdo: *Aprobar el Cuadro de Mando Integral propuesto para evaluar el desempeño del Fodemipyme en el periodo 2025.*

Todos los directores están de acuerdo con la propuesta.

Al respecto, la Junta Directiva Nacional acuerda por unanimidad:

“Aprobar el Cuadro de Mando Integral propuesto para evaluar el desempeño del Fodemipyme en el periodo 2025.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal sobre el sistema de evaluación del desempeño basado en el cuadro de mando integral y en el balance de desarrollo personal, el artículo 36 inciso a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Técnicos y Comisiones del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Instructivo de Proceso Gestionar un Sistema de Evaluación del Desempeño basado en el CMI y BDP y los Lineamientos y Acciones Estratégicas Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal periodo 2023-2025”. (1319)

ACUERDO FIRME.

Al ser las **siete horas con treinta y tres minutos**, finaliza su participación virtual el director ejecutivo del Fodemipyme Sr. Mauricio Arias Ramírez.

ARTÍCULO 19

8.3.3.- El Comité Corporativo de Riesgo traslada, para aprobación, la propuesta de modificación del apartado “8. Fórmulas de capacidad de pago” de la *Metodología estándar de medición de la capacidad de pago etapa de aprobación, seguimiento y arreglos de pago* (versión XIV), con el propósito de aplicar los diversos cambios normativos que ha venido implementando la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) durante los últimos años en lo referente a la conformación de los Grupos de Interés Económico (GIE). (Ref.: Acuerdo CCR-21-ACD-219-2024-Art-8)

El director corporativo de Riesgo Sr. Aguilar Rojas saluda e indica que, tal como se requirió, se cuenta con el criterio del director jurídico sobre la disposición de ajuste normativo interno, a fin de adaptar los cambios dictados por el Conassif. Igualmente, se tienen las valoraciones del área comercial.

Explicará la génesis y sustento de dicha reforma. En primer lugar, desde la óptica de gobierno corporativo, debe hacer referencia al artículo 27 del Reglamento de la Sugef 2-10, el cual establece como responsabilidad del Comité de Riesgos en su inciso a: *Evaluar, revisar y proponer para aprobación del órgano de dirección los objetivos, las políticas, las estrategias y las metodologías para el proceso de gestión de riesgo de crédito, así como las modificaciones que se realicen a éstos.*

En este caso, después de evaluar a profundidad lo planteado por el área comercial y con aval de su Dirección, se plantea un ajuste a una política ya aprobada por este Órgano de Dirección en cuanto a las capacidades de pago para los grupos empresariales.

En cuanto a los cambios sobre la normativa de supervisión consolidada, se eliminó el acuerdo SUGEF 5-04 que es el Reglamento sobre el cual se establecen los parámetros para clasificar a los clientes según los grupos de interés económico.

En ese Reglamento en el capítulo 2, se aborda a los grupos de interés económico, artículo 4, donde se hablaba de la identificación de los grupos.

Recalca que se señala en esa norma derogada que es responsabilidad de cada entidad identificar las relaciones financieras administrativas y patrimoniales significativas a las que se refieren los artículos 5 y 6 de este Reglamento.

Destaca que lo relevante es que las relaciones financieras administrativas y patrimoniales deberían hacerse entre los deudores con operaciones activas totales por una suma equivalente al 2% o más del capital ajustado de la entidad; es decir, si no se completaba el 2% del capital ajustado de la entidad que en este caso está alrededor de los ₡18.000 millones y si la sumatoria de las operaciones no alcanzaban ese umbral, no debían realizar la debida diligencia para identificar las relaciones financieras significativas.

El nuevo Reglamento sustituye al acuerdo SUGEF 5-04, el nuevo es el acuerdo SUGEF 4-22 denominado *Reglamento sobre límites a las operaciones activas directas e indirectas de una entidad supervisada*. En el artículo 16 sobre la identificación de grupos de interés económico se elimina el umbral; es decir, ya no se hace referencia a un umbral. Procede a leer:

La entidad es responsable de identificar las personas, que tienen entre ellas, relaciones financieras, administrativas y patrimoniales significativas a las que se refieren los artículos 18, 19 y 20 de este capítulo, con las cuales la entidad posee operaciones activas directas e indirectas.

Explica que el Banco ha estado muy activo con respecto a este tema y él ha liderado en el Foro Interbancario de Riesgos de la Cámara de Bancos la interpretación y aclaración de esa norma.

En ese sentido habían preparado una nota a la cual la Sugef respondió mediante el oficio SGF-900-2024 dirigida a la Cámara de Bancos. Recalca que la nota borrador él la preparó, fue suscrita por la Cámara de Bancos y por eso la respuesta es ante esa Entidad.

La superintendente señaló lo siguiente:

Al respecto esta Superintendencia señala que el marco normativo vigente no establece un umbral mínimo a partir de cual se deba iniciar con la identificación de los Grupos de Interés Económicos. Por lo tanto, mientras no se modifique la normativa, corresponde a las entidades supervisadas realizar los análisis necesarios para todos los deudores, con el fin de identificar si existen relaciones financieras, administrativas o patrimoniales significativas que configuren un Grupo de Interés Económico.

Asevera que tal y como se indica en la nota de la Sugef deben realizar el estudio de conformación de grupos de interés económico a la totalidad de los clientes, sin importar el monto o los créditos que el deudor tenga en el Banco.

Añade que a lo anterior también adicionaron otro elemento dentro del marco de la nueva norma SUGEF 4-22; es decir, la nueva norma sobre grupos de interés, específicamente el artículo 18.

Detalla que en el artículo 18 se establece la definición de una relación financiera significativa. En dicho artículo se menciona que existe una relación financiera significativa entre dos personas cuando se presente cualquiera de las situaciones y destaca el inciso c) que es cuando se da una relación de deudor con su codeudor o codeudores; es decir, la normativa determina que hay una relación de grupos de interés económico cuando existe una relación de deudor con deudor.

Ese es el caso que hoy deben valorar en términos del ajuste a la norma que ya esta Junta Directiva había aprobado.

Dice que al alinear la normativa SUGEF 4-22 de grupos de interés económico con la normativa SUGEF 14-21 que es el *Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias*, específicamente en el artículo 5 sobre la segmentación de la cartera de créditos esta agrupa en siete grupos los créditos: Empresarial 1 que son los créditos de más de ₡1000 millones, Empresarial 2 que son créditos de ₡500 millones a ₡1000 millones y Empresarial 3 que son aquellos que están por debajo de los ₡500 millones.

Después tienen el grupo de vivienda, consumo, reductivo y vehículo.

Acerca de lo que se establece en el segmento Empresarial 1 según la normativa SUGEF 14-21 se indica lo siguiente:

1)Empresarial 1: Personas jurídicas y físicas cuyo saldo total adeudado, excluyendo los créditos para vivienda a que se refiere el literal d) anterior, en la entidad financiera durante los últimos 12 meses haya superado los 1.000 millones de colones por lo menos en una oportunidad. En ese caso se indica que la persona jurídica que pertenece a un grupo de interés económico reportado por la Sugef; es decir, independientemente del tamaño si la persona jurídica es reportada como grupo de interés económico sin importar el monto, debe ser ubicado como Empresarial 1.

Referente a los casos del segmento Empresarial 1 para poder ser catalogados como capacidad de pago nivel 1, se requiere que dichos deudores presenten los estados financieros auditados. De ese modo se encuentran ante la disyuntiva de una microempresa que tiene capacidad de pago 1 con base en las metodologías aprobadas.

Aclara que en el Banco no hay operaciones en las que no se valore la capacidad de pago y está definido por políticas que aprobó esta Junta Directiva con las cuales se tienen los niveles de capacidad de pago para otorgar créditos. En el caso de la microempresa debe tener un nivel de capacidad de pago 1.

A pesar de tener esa capacidad de pago la propuesta es no pedir los requisitos de estados financieros auditados que son requisitos *sine qua non* para mantenerlos en nivel de capacidad 1 y reclasifique en capacidad de pago 2, pero con capacidad de pago 1, con base en los flujos y la información financiera, metodologías y políticas institucionales.

Para no pedir los estados financieros auditados la norma pide que lo castiguen al no otorgar capacidad de pago 1 aunque lo tenga, pero como no entrega los estados financieros auditados, debe reclasificarse en nivel de capacidad de pago 2.

Entonces, asevera que unen las dos normativas cuando hay una relación de deudor con deudor y esa condición los lleva a conformar grupos de interés económico, se están presentando casos en los que exista esa figura de codeudor por montos de crédito muy bajos y solo por esa condición son operaciones con nivel de capacidad de pago 1 con base en los flujos, en la información financiera interna y con base en los parámetros aprobados, pero son clientes con nivel de capacidad 1.

Repite que solamente se debe a la condición de que hay una figura de codeudor que se convierte en grupo de interés económico en virtud de que la normativa dejó abierto el tema de los grupos de interés económico y por eso esas empresas para mantener la clasificación en nivel de capacidad 1 que arroja el análisis de los flujos, deben presentar estados financieros auditados.

Asevera que la presentación de estados financieros auditados para créditos relativamente pequeños resulta una situación que restringe la celeridad y el costo que representa para las microempresas y pequeñas empresas acceder a esa información.

En lo concerniente a los impactos de la normativa, explica que la normativa deja ese vacío y están gestionando nuevamente ante el regulador para poder establecer el límite al 2%, lo cual les parece razonable, pero mientras no haya un límite, deben hacerlo tal y como lo indicó la respuesta de la Sugef en el oficio SGF-2900-2024.

Entonces, la normativa interna vigente no permite aceptar casos del segmento Empresarial 1 en nivel 2 de capacidad de pago y tal y como lo establece el documento aprobado por esta Junta Directiva en octubre de 2024, denominado Metodología estándar de medición de la capacidad de pago etapa de aprobación, seguimiento y arreglos de pago versión XIV y con base en lo que el Comité Corporativo de Riesgo recomendó en su momento, no se acepta.

Recalca que esta es una norma interna, la definición internamente de qué niveles de capacidad de pago aceptan es del Banco, pero sí tienen efecto en que, si aceptan niveles de capacidad de pago diferentes a 1, deben estimar diferente, eso sí está claro, pero la norma no limita de acuerdo con el apetito de riesgo a definir los niveles de capacidad de pago diferentes a 1.

En el apartado 8 de la norma vigente sobre las fórmulas de capacidad de pago se establece la posibilidad de aceptar deudores con capacidad de pago en nivel 2 en los segmentos que no son Empresarial 1 ni Empresarial 2, según lo siguiente:

Para efectos de otorgamiento de créditos, el Banco aceptará clientes cuyo Nivel de Capacidad de Pago sea 1 y 2 para segmentos diferentes a empresarial 1 y 2, en estos últimos casos se aceptará como máximo nivel 1. Estos niveles de capacidad de pago aplican solo para productos específicos y previo análisis financiero y riesgos.

Espera haber explicado de manera clara la preocupación que tiene el área Comercial la cual la Dirección Corporativa de Riesgo ha valorado. Es un tema que él ha liderado en la Cámara de Bancos por ser un asunto que realmente tiene mucha implicación operativa al tener que evaluar relaciones significativas para créditos por montos pequeños. Eso ha complicado al negocio.

Comenta que en el apartado aprobado en octubre de 2024 sobre las formas de las metodologías de pago están agregando lo nuevo. Cree que esa propuesta no incrementa los niveles de riesgo en virtud de que están otorgando a Empresarial 1 con nivel de capacidad 1, o sea, no están modificando el nivel de capacidad 1, sino que solamente por una disposición normativa por ser grupos de interés económico la relación de codeudor-deudor deben ubicarla en un nivel de capacidad de pago 2, no pueden mantener una capacidad de pago 1, a pesar de que tenga capacidad de pago 1.

Enfatiza que, entonces, el nivel de estimación no es un 1%, sino de 2%.

Como parte de la forma de capacidad de pago lee la propuesta de modificación:

Como excepción a lo anterior, en los casos que, pasen a ser clasificados en el segmento Empresarial 1, o sea, clientes de más de ₡1.000 millones de crédito, únicamente por el hecho de que conforman o que conformarán un grupo de interés económico en el Banco y que, consecuentemente, sean clasificados con Capacidad de Pago Nivel 2 por no presentar estados financieros auditados, serán aceptados como sujetos de crédito en el Banco, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

1. El Nivel 2 de Capacidad de Pago sea originado únicamente por el hecho de conformar Grupo de Interés Económico (GIE) y no presentar el requisito de estados financieros auditados.

Aclara que son los créditos de categoría 3.

Continúa leyendo:

2. El cliente, excluyendo la condición de GIE, no corresponde a los segmentos Empresarial 1 ni 2.

3. El nuevo crédito presente garantía real, que permita mitigar el impacto en estimaciones originado por el nivel 2 de capacidad de pago.

Añade que por el hecho de que van a incrementar de 1% al 2% la estimación, necesitan tener un mitigador que minimice el impacto en términos del gasto financiero.

Al reclasificar las operaciones con las condiciones que está planteando en el nivel de capacidad 2 el porcentaje de estimación pasaría de 1% a 2%, o sea, cuando otorga un crédito en nivel de capacidad 1 y está al día, tiene un nivel de estimación de 1%.

Si esa operación se registra en la originación con un nivel de capacidad 2, deben estimar no un 1% sino un 2%, ese sería el impacto.

Parte de la propuesta es que estas operaciones tengan garantía real, por lo cual, ese nivel de estimación se estaría mitigando y no estarían afectando la capacidad de pago. Asegura que no es una condición para afectar la situación de crédito porque esos créditos fueron analizados de acuerdo con las metodologías nuestras en nivel de capacidad 1. En nivel de capacidad 2 sería únicamente que por ser grupo de interés económico deben exigir los estados financieros auditados, pero por no tenerlos deben reclasificarlos en capacidad de pago 2.

Acota que el nivel de riesgo de esos créditos no sería modificado dado que el nivel de capacidad de pago en la fuente original en función de la información financiera contable es 1, no se está modificando. Solo se está modificando el nivel de estimación dado que, por no presentar los estados financieros auditados, no puede mantener esa condición de nivel de capacidad 1.

Le parece que de la presentación de la semana anterior quedaron varias interrogantes y por tanto desea repetir que en todos los créditos se valora la capacidad de pago y por política a ese tipo de segmentos si no tiene capacidad de pago 1, no se otorga el crédito.

Indica que el Sr. Mario Roa se referirá al tema porque este cambio permitirá movilizar operaciones hacia ese segmento de micro, pequeña y mediana empresa dada esa restricción. Asegura que a la competencia no lo están pidiendo y por esa razón él está gestionando ese asunto en la Cámara de Bancos porque por consultas formuladas a los colegas, se dio cuenta de que ellos están aplicando la norma de manera subjetiva, no obstante, el Regulador pidió que a todos los créditos deben aplicar la norma.

Menciona que se está aplicando una simetría en términos de la aplicación y ha afectado el negocio y el servicio al cliente hacia las micro y pequeñas empresas.

Recuerda que en la sesión anterior pidieron el criterio legal como requisito *sine qua non* para discutir este tema, así como las consideraciones comerciales y por eso sería bueno escuchar al Sr. Mario Roa y al Sr. Ricardo Azofeifa.

Al ser las **siete horas con cincuenta y seis minutos**, inicia su participación virtual el director jurídico corporativo Sr. Ricardo Azofeifa Castillo.

El subgerente general de Negocios Sr. Roa Gutiérrez considera que el Sr. Maurilio Aguilar fue muy amplio en la explicación, es un caso normativo que ocurre únicamente por el hecho de tener relaciones significativas y de formar grupos de interés económico. Eso genera que se da a la capacidad de pago en nivel 1 y solo por no tener estados financieros auditados eso limita y compromete a pagarlo en nivel de capacidad de pago, pero no significa que tenga debilidades en la capacidad de pago. Eso se solventó pidiendo un mitigador que es la garantía real.

Comenta que aplicaron un ejercicio en un documento en donde en un caso de ₡50 millones la estimación vendría a ser de ₡25.000 versus ₡250.000 si no se presenta el efecto mitigador.

Realiza la salvedad de que incluso el Banco ha estado otorgando créditos sin garantía real y está estimando con la garantía mitigadora, por lo que la estimación es marginal con respecto a lo que aplicaban con la normativa anterior.

Le parece que ya cuentan con la aclaración de la Dirección Jurídica Corporativa en donde se confirma que no hay problemas para poder aprobar esa condición.

El director Sr. Espinoza Guido observa que se plantea como un mitigador del incremento en el nivel de estimaciones el tener una garantía real de los clientes, pero no comprende cómo una garantía real funcionará como un mitigador de ese efecto porque el efecto del incremento en las estimaciones es un efecto contable inmediato y la garantía real podría representar una posibilidad de recuperación de la inversión en caso de adjudicación de ese bien.

Cree que el efecto de las estimaciones en la propuesta es el incremento. El objetivo con estos cambios es liberar las amarras para que la parte comercial pueda compensar este incremento en el gasto vía volumen de negocios, razón por la cual, pregunta cuál es la evaluación técnica financiera de proyección de negocios para poder tener esa visión un poco más clara.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja solicita la opinión del Sr. Azofeifa Castillo antes de ceder la palabra al director corporativo de Riesgo. Menciona que, posteriormente, se responderán tres puntos específicos. Durante su intervención, pregunta si la Sra. Shirley González Mora está solicitando la palabra.

Aclara el orden de las intervenciones, indicando que desea finalizar el tema escuchando las opiniones del Sr. Ricardo Azofeifa Castillo y luego del Sr. Aguilar Rojas, antes de cerrar el asunto.

La directora Sra. González Mora expresa su posición retomando argumentos expuestos previamente. Manifiesta que, aunque agradece que la decisión haya sido documentada de manera adecuada, mantiene las mismas preocupaciones y observaciones planteadas al inicio de la discusión.

Indica que su voto positivo en este tema estaría sustentado únicamente en la confianza depositada en los parámetros establecidos por la Dirección Corporativa de Riesgos. Confía en que estos parámetros garantizarán que los créditos autorizados y desembolsados sean sanos y beneficiosos para el Banco, sin generar incrementos significativos en las estimaciones.

No obstante, recuerda que el cambio del nivel 1 al 2 inevitablemente generará efectos y enfatiza la importancia de adjudicar garantías mínimas, reiterando que el negocio del Banco no radica en asumir riesgos desproporcionados. Aunque expresa confianza en los parámetros establecidos, reitera que persisten sus dudas y preocupaciones respecto a la propuesta.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja agradece la intervención de la señora directora. Pregunta si la directora Palomo Leitón desea intervenir; de lo contrario, cederá la palabra a la directora Solano Brenes.

La directora Sra. Palomo Leitón responde que no.

La directora Sra. Solano Brenes plantea que este tipo de iniciativas es relevante, especialmente en lo que respecta a facilitar el crédito a ciertos sectores. Hace una aclaración respecto de los estados financieros que se solicitan: aunque no necesariamente deben estar auditados, resulta crucial especificar los requisitos aplicables. En particular, subraya la importancia de que estos estados estén debidamente firmados, ya sea por contadores públicos o privados, siempre y cuando estos estén colegiados. Se recalca la necesidad de verificar la autenticidad de los profesionales mediante los colegios respectivos para garantizar la confiabilidad de los datos financieros.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja agradece por la intervención.

El auditor interno a. i. Sr. Chaves Soto formula una consulta al Sr. Aguilar Rojas sobre el impacto que podría tener el cambio normativo de solicitar garantía real en productos específicos como "Acelera, Franquicias, Turismo" o "Ganadería Sostenible". Estos productos, según señala, usualmente requieren un aval y un pagaré como garantía y los montos máximos de los créditos rondan los \$100.000, considerando que los beneficiarios son clientes con capacidad de pago de nivel 1. Se pregunta cómo este cambio podría afectar la colocación de productos destinados a clientes de micro y pequeñas empresas y si esta posible afectación ha sido analizada.

La directora Sra. Palomo Leitón comenta que, en sesiones anteriores, junto con otros directores, ya se discutió ampliamente la presentación del Sr. Aguilar Rojas. Destaca que el objetivo principal es dar continuidad al negocio, apoyando al área Comercial para que cumpla sus metas, las cuales ya estaban definidas bajo la normativa vigente. Señala que el cambio propuesto busca simplificar procesos para facilitar el flujo del negocio. El giro del negocio es el de otorgar créditos y, así, podrán limpiar el camino para que se pueda continuar.

En cuanto a la solicitud de garantías reales, señala que, aunque no es una práctica habitual, puede servir como medida de mitigación en caso de impagos, protegiendo así los intereses del Banco. Concluye que el apoyo de su parte, como miembro del Comité de Riesgos, radica en generar negocios de manera responsable.

El director Jurídico corporativo Sr. Azofeifa Castillo manifiesta que no logró escuchar la presentación del Sr. Aguilar Rojas, aunque asume que fue detallada. Explica que los cambios normativos suelen generar efectos colaterales que impactan a los clientes, especialmente a las pequeñas empresas. Hace referencia al análisis de normativas específicas (4-22 y 14-21) y las implicaciones de las estimaciones contables en la clasificación de capacidad de pago.

Destaca que, en caso de pasar a capacidad de pago nivel 2, sería necesario solicitar estados financieros auditados, lo cual podría representar un obstáculo para muchas pequeñas empresas. Menciona que la normativa incluye un monto mitigador relacionado con las garantías, lo que permite equilibrar el impacto normativo en los clientes.

Seguidamente, consulta al Sr. Aguilar Rojas si hay un monto mitigador de las garantías, según lo establece la Ley 14-21, respecto de que se está tratando de sopesar entre el efecto que tiene pasar a un cliente que no solía tener capacidad de pago 2, producto de la maraña normativa y mitigarlo un poco, a partir de la solicitud de la garantía real.

Desde un enfoque legal, subraya que la modificación está diseñada conforme a la *Ley general de la administración pública* (artículo 16), respetando principios de técnica, justicia y conveniencia, el cual dice que: *en ningún caso podrá indicarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia de la técnica a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia* y afirma que la Dirección Corporativa de Riesgo busca garantizar que el acto administrativo cumpla con los estándares legales, técnicos y justos para apoyar a este sector de clientes afectados por la modificación normativa de la Sugef.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja agradece la intervención y solicita al director Navarro que lea la propuesta de acuerdo.

El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano lee la propuesta de acuerdo, que dice:

Aprobar la propuesta de modificación del apartado "8. Fórmulas de capacidad de pago" de la Metodología estándar de medición de la capacidad de pago etapa de aprobación, seguimiento y arreglos de pago (versión XIV), con el propósito de aplicar los diversos cambios normativos que ha venido implementando la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) durante los últimos años en lo referente a la conformación de los Grupos de Interés Económico (GIE).

El apartado se leerá de la siguiente manera:

8. Fórmulas de capacidad de pago

Para efectos de otorgamiento de créditos, el Banco aceptará clientes cuyo Nivel de Capacidad de Pago sea 1 y 2 para segmentos diferentes a Empresarial 1 y 2; en estos últimos casos se aceptará como máximo nivel 1. Estos niveles de capacidad de pago aplican solo para productos específicos y previo análisis financiero y de riesgos.

Como excepción a lo anterior, en los casos que, pasen a ser clasificados en el segmento Empresarial 1 únicamente por el hecho de que conforman o que conformarán un grupo de interés económico en el Banco y que, consecuentemente, sean clasificados con Capacidad de Pago Nivel 2 por no presentar estados financieros auditados, serán aceptados como sujetos de crédito en el Banco, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

- 1. El Nivel 2 de Capacidad de Pago sea originado únicamente por el hecho de conformar Grupo de Interés Económico (GIE) y no presentar el requisito de estados financieros auditados.*
- 2. El cliente, excluyendo la condición de GIE, no corresponde a los segmentos Empresarial 1 ni 2.*
- 3. El nuevo crédito presente garantía real, que permita mitigar el impacto en estimaciones originado por el nivel 2 de capacidad de pago.*

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo CONASSIF 04-16 Reglamento sobre Gobierno Corporativo y el artículo 29 inciso g) del Acuerdo SUGEF 2-10 Reglamento sobre Administración Integral de Riesgo.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja solicita un momento antes de proceder. Verifica si el Sr. Aguilar Rojas está presente para realizar las acotaciones solicitadas antes de someter el tema a votación.

El director corporativo de Riesgo Sr. Aguilar Rojas confirma su presencia y procede con su intervención.

Explica, de manera breve, varios puntos relacionados con las consultas y observaciones planteadas: señala que, según el artículo 19 de la norma, la garantía tiene un efecto mitigador contable. Por ende, contablemente el impacto contable es nulo, ya que el crédito comienza a

deteriorarse desde su origen bajo una fórmula matemática que considera un porcentaje inicial (2%) multiplicado por factores como el tiempo y otros elementos. Si bien al principio el impacto inicial es cero, en caso de deterioro del crédito, la garantía mitigará parcialmente el efecto residual.

Aclara que la finalidad no es apropiarse de bienes inmuebles, dado que las garantías son solo un factor mitigador adicional, no el elemento principal en la evaluación de los créditos, los cuales se otorgan en función de la capacidad de pago de los clientes, quienes tienen nivel 1.

Sobre los parámetros de capacidad de pago, reitera que los créditos se evalúan bajo las "5 C" del crédito y que la condición original del cliente es tener capacidad de pago nivel 1.

Confirma que existe una normativa clara que define los niveles de documentación financiera y contable requeridos para valorar los flujos y la capacidad futura de recuperación del crédito. Estos parámetros están ajustados según los umbrales de crédito establecidos y deben ser sustentados por profesionales debidamente acreditados y colegiados.

Señala que cada producto cuenta con características particulares que determinan sus condiciones. No todos los créditos requieren garantías reales; esta medida aplica únicamente para aquellos casos donde exista una relación de codeudor o pertenezcan a un grupo de interés económico, lo que los clasifica como nivel 1 y exige estados financieros auditados. Este criterio no es generalizado para todos los productos del segmento de micro y pequeñas empresas, sino que se aplica dependiendo de las condiciones específicas del crédito.

Concluye indicando que, desde un punto de vista financiero, de riesgos y comercial, cada producto se evalúa según sus especificidades y no bajo criterios generalizados.

Considera que ha abordado la mayoría de las observaciones planteadas y espera que su explicación haya sido suficiente para aclarar las inquietudes de los directores y directoras presentes.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja agradece por la intervención y somete el tema a votación.

Todos los directores se muestran conformes con el acuerdo y le dan firmeza.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda, por unanimidad:

“Aprobar la propuesta de modificación del apartado “8. Fórmulas de capacidad de pago” de la Metodología estándar de medición de la capacidad de pago etapa de aprobación, seguimiento y arreglos de pago (versión XIV), con el propósito de aplicar los diversos cambios normativos que ha venido implementando la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) durante los últimos años en lo referente a la conformación de los Grupos de Interés Económico (GIE).

El apartado se leerá de la siguiente manera:

8. Fórmulas de capacidad de pago

Para efectos de otorgamiento de créditos, el Banco aceptará clientes cuyo Nivel de Capacidad de Pago sea 1 y 2 para segmentos diferentes a Empresarial 1 y 2, en estos últimos casos se aceptará como máximo nivel 1. Estos niveles de capacidad de pago aplican solo para productos específicos y previo análisis financiero y riesgos.

Como excepción a lo anterior, en los casos que, pasen a ser clasificados en el segmento Empresarial 1 únicamente por el hecho de que conforman o que conformarán un grupo de interés económico en el Banco y que, consecuentemente, sean clasificados con Capacidad de Pago Nivel 2 por no presentar estados financieros auditados, serán aceptados como sujetos de crédito en el Banco, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

1. El Nivel 2 de Capacidad de Pago sea originado únicamente por el hecho de conformar Grupo de Interés Económico (GIE) y no presentar el requisito de estados financieros auditados.
2. El cliente, excluyendo la condición de GIE, no corresponde a los segmentos Empresarial 1 ni 2.
3. El nuevo crédito presente garantía real, que permita mitigar el impacto en estimaciones originado por el nivel 2 de capacidad de pago.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo CONASSIF 04-16 *Reglamento sobre Gobierno Corporativo* y el artículo 29 inciso g) del Acuerdo SUGEF 2-10 *Reglamento sobre Administración Integral de Riesgo*". (1320)
(Ref.: Acuerdo CCR-21-ACD-219-2024-Art-8)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 20

8.4.1.- La Sra. Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa, remite, para aprobación, la actualización de la Política de Seguridad y Ciberseguridad, con respecto a lo que establece la ISO 272002:2022. (Ref.: Oficio GGC-1319-2024)

Al ser las **ocho horas con dieciocho minutos**, inicia su participación virtual el Sr. Freddy Roca Abarca, jefe de la División de Seguridad Corporativa.

El jefe de la División de Seguridad Corporativa Sr. Roca Abarca agradece la palabra y saluda cordialmente a los miembros de la Junta Directiva. Seguidamente, expone sobre la actualización de la política de seguridad de la información y ciberseguridad. Al respecto, comenta que este documento es una política que establece los lineamientos generales en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, en cumplimiento de las buenas prácticas y actualizaciones recientes en esta materia, pues corresponde revisar y refrescar la materia.

Cabe mencionar que, como parte del contexto normativo, se dio la correlación con la actualización normativa reciente, específicamente la CONASSIF 5-24, que introduce elementos relacionados con seguridad cibernética y resiliencia operativa digital.

También, resalta la influencia de los estándares ISO/IEC 27001 y 27002, actualizados en enero de 2022, los cuales representan prácticas clave para gestionar sistemas de seguridad de la información.

Como parte del proceso previo, detalla que el documento fue revisado por la Dirección de Excelencia Operacional, la División de Planificación Estratégica Corporativa y la Dirección Jurídica Corporativa. Estas instancias realizaron observaciones y consultas que ya fueron atendidas antes de elevar el documento a la Junta Directiva.

Explica que las modificaciones incluyen ajustes derivados del modelo organizacional 2.0, así como cambios en nombres de dependencias y áreas del conglomerado.

Seguidamente, menciona los principales cambios propuestos:

La introducción se alinea con las pautas de 2022 de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y se enfatiza el monitoreo y cumplimiento estratégico-financiero del Banco Popular y su Conglomerado. También, se incluye la política 28, relacionada con cumplimiento normativo y regulatorio.

En el objetivo se amplió el alcance de la política para incluir el concepto de ciberseguridad, conforme a la norma ISO/IEC 27002, la cual fue actualizada en 2022. Además, se incluye la gestión integral de seguridad, cubriendo tanto al personal interno como a terceros que acceden, procesan, almacenan o transmiten información del Conglomerado.

En cuanto a los enunciados de política, indica que se realizaron los siguientes ajustes, los cuales están destacados en color azul en la presentación y dice así:

El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal se compromete a la implementación de los controles de seguridad de la información y ciberseguridad para proteger los activos de información indistintamente de su formato (físico o digital) mediante la normativa interna, regulaciones, leyes, buenas prácticas de la industria y estrategias para dicho fin, salvaguardando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información generada y gestionada en los procesos del Conglomerado.

Por lo demás, se mantiene el resto del texto. Asimismo, en la descripción de la política se incorpora el término "ciberseguridad," ajustando el texto para reflejar un enfoque integral, de modo que dice:

La normativa interna de seguridad de la información y ciberseguridad debe establecer los controles y requerimientos que permitan gestionar los riesgos de seguridad a niveles razonables para el Conglomerado, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Asimismo, proporcionar orientación y apoyo a las Unidades Estratégicas del Negocio (UEN), para establecer la seguridad de la información y ciberseguridad de acuerdo con los requerimientos del negocio y regulaciones pertinentes.

Posteriormente, se agregó a la seguridad de la información la palabra de "ciberseguridad", así como en la parte de Activos de la información, arquitectura empresarial, terceros y personal del Conglomerado, conforme al alcance definido.

También, se incluye en el siguiente texto:

Promover en el Conglomerado la mejora constante y consistente con el nivel de capacidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, enfatizando en la cultura, educación, formación y comprensión de las responsabilidades personal, alineado a la norma ISO 27001 e ISO27002 como marco de referencia.

Luego, en torno a las responsabilidades de la implementación, evaluación y seguimiento de la política, se hizo el siguiente ajuste, de modo que en la parte de la Junta Directiva se mantiene, pero informa que anteriormente solía existir el Comité Corporativo de Seguridad de la Información, el cual se mantiene, pero se transforma en un Equipo Gerencial y ahora se denomina EGESEC, de modo que se realizó el cambio del nombre:

En la División de Seguridad de la Información, el nombre pasó a ser División de Seguridad Corporativa, de modo que también se actualizó el dato y se incluyeron los fiscalizadores del contrato, que son los enlaces con los terceros que acceden, procesan o almacenan otra información del Conglomerado, de modo que se incluye el rol del fiscalizador del contrato, de modo que dice:

Fiscalizador de Contrato:

Asegurar el comunicado de la política o normativa de seguridad al Tercero.

Entonces, cada vez que se realice una modificación de las diferentes directrices, los fiscalizadores son quienes colaboran para remitir esta información.

Agrega que, además de comunicar esto, se hace una evaluación anual para confirmar que se estén cumpliendo las directrices y, así, verificar las situaciones de riesgo.

Con respecto a la actualización de los instrumentos de planificación, se generó el alineamiento con los objetivos del Plan estratégico del Conglomerado Financiero 2024-2027, el cual es la versión 2.0. Seguidamente, lee la información:

Objetivo #2: Maximizar la rentabilidad financiera potenciando los modelos de negocio comercial y social, mediante la gestión eficiente del balance, el riesgo, control y cumplimiento.

Objetivo #3: Implementar un proceso de transformación digital, para maximizar la eficiencia y ofrecer soluciones de negocio innovadoras, competitivas, seguras y oportunas para nuestros clientes.

Relación con Indicadores Cuadro Mando Integral Institucional 2024

RF8. Nivel de apetito y perfil de riesgos.

TD2. Porcentaje de cumplimiento del portafolio de Transformación.

Planes Tácticos- Planes de Trabajo 2024:

Plan Táctico de Transformación & Innovación.

Plan de Trabajo Dirección Corporativa de Riesgos.

A continuación, menciona la siguiente consideración final:

Que la División Seguridad Corporativa realiza la actualización de la Política Seguridad de la Información y Ciberseguridad, según lo establecido en la norma ISO 27002, de 2022.

Por último, propone el siguiente acuerdo:

Con fundamento en los elementos que se mencionaron anteriormente, se solicita la valoración y aprobación del siguiente acuerdo:

Dar por aprobada la Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, con la incorporación de los componentes relacionados a Ciberseguridad y proveedores y terceros, según lo establecido en la norma ISO 27002:2022.

Dicho lo anterior, queda atento a consultas.

El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano comenta que la propuesta de acuerdo es similar a la propuesta distribuida con la agenda.

Todos los directores se manifiestan conformes con el acuerdo y le dan firmeza.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda, por unanimidad:

“Aprobar la actualización de la Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, con la incorporación de los componentes relacionados a Ciberseguridad y proveedores y terceros, según lo establecido en la norma ISO 27002:2022 denominada *Tecnologías de la información-Técnicas de seguridad-Código de prácticas para la gestión de la seguridad de la información* y de conformidad con el artículo 11 inciso c) del acuerdo CONASSIF 5-24 *Reglamento General de Gobierno y Gestión de la Tecnología de Información*”. (1321)
(Ref.: Oficio GGC-1319-2024)

ACUERDO FIRME.

Al ser las **ocho horas con veintisiete minutos**, finaliza su participación virtual el Sr. Freddy Roca Abarca, jefe de la División de Seguridad Corporativa.

ARTÍCULO 21

El presidente Sr. Sánchez Sibaja solicita al Sr. Mora Mora que proceda con su tema como parte de los asuntos de Gerencia y le consulta si cuenta con una presentación o si abordará el tema sin ella.

El subgerente de Operaciones Sr. Mora Mora responde que requerirá del apoyo de la Sra. Goyez Rojas, para lo cual solicita que se le vincule a la sesión.

Seguidamente, explica que este punto se basa en la Convención Colectiva, la cual establece que los ajustes salariales serán conformes al índice de inflación como mínimo. Señala que el Banco tenía presupuestado un incremento salarial del 1% para el año 2024, pero la propuesta actual es menor a este porcentaje. Explica que, de acuerdo con la proyección financiera, el ajuste sugerido no tiene un impacto negativo, dado que está contemplado dentro de los márgenes presupuestados.

El ajuste propuesto es el siguiente:

-Un 0,25% para todas las estructuras del Banco.

-Un 0,50% adicional para plazas menores a la categoría 19, con el objetivo de beneficiar a este segmento de manera diferenciada.

No obstante, reitera que todo está contemplado dentro de la proyección financiera originalmente propuesta.

Al ser las **ocho horas con veintiocho minutos**, inicia su participación virtual la directora corporativa a. i. de Capital Humano Sra. Silvia Goyez Rojas.

La directora de Capital Humano a. i. Sra. Goyez Rojas saluda a los presentes y detalla la propuesta de ajuste salarial para el segundo semestre del año 2024, destacando los siguientes puntos: sobre la propuesta presupuestaria y proyección financiera, informa que el ajuste salarial está contemplado dentro del presupuesto aprobado a inicios de año, el cual preveía un incremento del 1% sobre la planilla total.

Señala que la proyección actual es inferior al porcentaje presupuestado, permitiendo que la propuesta sea financieramente viable. Por ende, se propone un ajuste escalonado, de modo que las categorías de la 1 a la 19 (generalmente no profesionales) reciban un aumento adicional del 0,50%, superando la simple compensación por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para el resto del personal; es decir, categorías 20 en adelante, incluyendo puestos de dirección y de alta gerencia que no están amparados por la convención colectiva, se aplicaría únicamente la compensación basada en el IPC.

Cabe agregar que se solicitó el criterio técnico a áreas clave, tal como la Dirección Financiera, que validó que este ajuste no afecta los resultados financieros del Banco y que está cubierto dentro de las proyecciones. Asimismo, la Dirección de Riesgos revisó y respaldó la propuesta. La Dirección Jurídica confirmó la viabilidad legal del ajuste y de su aplicación escalonada.

Se cuenta con estos tres criterios. Con base en ellos se hicieron todos los cálculos, la revisión, se verificó que el contenido presupuestario existe.

Aclara que el contenido presupuestario se tuvo todo el año en una partida de remuneraciones que administra la Dirección Corporativa de Capital Humano, pero por los plazos que se tienen para la subejecución presupuestaria ella hace unos días liberó este presupuesto y se lo devolvió al Área de Presupuesto. Por esta razón, es que en la propuesta se requiere que se le devuelva una parte de este presupuesto a esta Dirección, y poderlo aplicar.

Manifiesta que la intención es hacer este ajuste lo antes posible, porque se necesita que quede dentro del corte de los periodos del 2024, antes de que inicie el periodo 2025, debido a que en el Banco Popular se pagan los salarios semanalmente. Además, los cortes de los periodos no necesariamente coinciden con las fechas del año, por eso debe hacerse en diciembre de 2024.

El impacto en la aplicación de este último semestre del 2024 con estos porcentajes de aumento es de ₡183.2 millones. Enfatiza que se cuenta con este dinero.

Da lectura a la propuesta de acuerdo:

- Se apruebe un ajuste salarial escalonado por categorías para el segundo semestre del 2024, retroactivo desde el 1° de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 para todo el colectivo del Banco Popular para compensar el aumento general de precios del año 2024.
- Que se incluya a la clase gerencial y a los directores que están fuera de la Convención Colectiva.
- Que se le autorice a la Gerencia General Corporativa hacer esa modificación interna para trasladarle a la Dirección Corporativa de Capital Humano los recursos que había regresado.

Las sociedades anónimas están aparte, por lo que, si ellas quieren valorar realizar el ajuste salarial, podrían hacerlo. Es decir, no están incluidas dentro de esta modificación.

Al ser las **ocho horas con treinta y dos minutos**, inicia su participación virtual el jefe de la División de Contabilidad Analítica Sr. Esteban Meza Bonilla.

El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano pregunta por qué se presenta hasta este momento este aumento salarial y solicita que se precise cuánto representa, porque es un pago retroactivo. Además, consulta cuál es la implicación de aplicar este aumento salarial en enero de 2025.

El director Sr. Espinoza Guido expresa que no le queda claro de dónde salen el 0,25% y el 0,50%, pregunta cuál es la lógica o el origen fáctico de estos porcentajes, ya que la inflación ha estado, incluso, negativa en los últimos periodos. Quisiera entender de dónde se originaron esos porcentajes y la razón por la que se plantean a esos dos segmentos.

Sobre el cuadro del impacto financiero, le parece que habla de ₡5900 millones; no sabe si está equivocado. Pero, sea lo que sea, la cifra sí impacta los resultados financieros; además, de que es un gasto perpetuo, porque va montándose sobre el costo de la planilla.

Pregunta cuál es la fuente de ingreso marginal que cubriría este gasto marginal, porque se puede tener presupuesto, pero cree que el impacto financiero para el próximo año y los años venideros se debe medir con mucha prudencia. Recuerda que se está en una situación ya no tan holgada, en vista de que ya se acabó la fuente de recursos de la desacumulación de las estimaciones, que justamente en este año significaron el monto de las utilidades con las que se cerrará.

Afirma que cualquier gasto adicional impactará de manera negativa los resultados financieros, y si no se tienen nuevas fuentes de ingresos el déficit será probablemente incontrolable. Entonces, él quiere tener todos estos elementos claros para votar responsablemente un planteamiento de esta naturaleza.

La directora Sra. Palomo Leitón indica que le queda claro que la Dirección Corporativa de Capital Humano tenía una partida y que la trasladó a otra área. Consulta en qué términos se trasladó la partida. Sigue estando en el estado de resultados, pero se le trasladó a otro centro de costos, porque ella entendió ayer que el aumento proyectado para el 2025 fue más bien del 1%, pero se está ejecutando un 0,25% y un 0,50%.

En el año 2025, se plantea un 1%, en el año 2024, se proyectó un 1%, pero no hubo reversión del gasto, sino que fue trasladado a otra área. De ahí que el efecto sería neto y más bien, asume que hay un sobrante.

Este monto se está haciendo retroactivo. Coincide con el señor Eduardo Navarro, de modo que cuando le responda a él, se dará por satisfecha de la duda. Pregunta cuánto porcentaje del salario de las personas representa hacer este retroactivo; representará un 20%, un 15%. Quisiera saber cuánto se acumuló para entender la magnitud de lo que recibirá cada empleado adicionalmente.

Consulta por qué se incluye a la clase gerencial, ya que en algún momento siempre se dijo que esa clase no iba a estar incluida en los aumentos de salario.

La directora Sra. González Mora expresa tener duda sobre el origen de ese 0,50% y 0,25%, es la misma duda planteada por el señor Raúl Espinoza.

Le pregunta a la señora Silvia Goyez por qué devolvió el presupuesto sabiendo que los aumentos salariales siempre se requieren y siempre se hacen. Cuestiona qué hubiera pasado si ese dinero se hubiera usado y no hubiera de dónde tomarlo. No comprende muy bien por qué se dio la devolución y se hizo la nueva solicitud.

Considerando que las subsidiarias tienen independencia en este tema, consulta en qué tiempo, mes o momento ellas resuelven y cuándo es conocido por esta Junta Directiva. En su parecer, un informe como este debería ser conglomeral.

La directora corporativa a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas responde que el aumento salarial se hace hasta este momento, porque la negociación salarial es el resultado de un acuerdo que debe existir entre la Administración y el Sindicato.

Desde la Convención Colectiva está normado que la Administración puede ajustar los salarios como piso con el indicador del IPC que se calcula para el acumulado del semestre.

El IPC acumulado en el semestre es de 0,22%, entonces, este es el piso. Este porcentaje sirve como base mínima, pero la decisión de aplicarlo, incrementarlo o no hacerlo depende de las circunstancias financieras del Banco, las proyecciones presupuestarias y otros indicadores el Banco puede tomar la decisión de ajustarse a ese porcentaje o aumentarlo.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja pregunta hace cuánto no se hacía un aumento.

La directora corporativa a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas aclara que el año pasado se realizó uno, pero no se lleva a cabo todos los años. En algunos años no se realiza el ajuste y en otros se incluye o excluye al personal gerencial, dependiendo de las circunstancias. En este caso particular, explica que la negociación con el sindicato fue tardía debido a que este estaba enfocado en la negociación de la convención colectiva. Una vez resuelto ese tema, se abrió el proceso de negociación salarial, lo que generó atrasos.

Menciona que, durante ese ínterin, las normativas internas de administración presupuestaria establecen que, para noviembre o diciembre, como máximo, financiero debe contar con los recursos que no se van a utilizar. Dado que no había una negociación en curso, la Administración decidió devolver los fondos presupuestados. Sin embargo, al retomarse la negociación, fue necesario realizar una modificación interna para reincorporar el dinero previamente devuelto. Esto implicó solicitar a financiero la reintegración de la partida correspondiente al 1%, no es necesario que devuelva ese porcentaje, porque el ajuste salarial va a ser menor, pero sí la diferencia de ₡183 millones mensuales.

Comenta que el Banco ha tenido que hacer un ajuste de renta a solicitud del Ministerio de Hacienda, relacionado con el método de cálculo de la renta al pagar por semanas en lugar de por meses, lo cual afectará los ingresos de los colaboradores en enero. Por esta razón, para evitar un impacto doble en sus economías, se propuso realizar el ajuste salarial en diciembre, cuando aún es posible hacerlo con los recursos presupuestarios disponibles, en lugar de postergarlo hasta febrero del año siguiente, lo que incrementaría el retroactivo.

Explica que el ajuste escalonado, que incluye un porcentaje adicional al IPC, del 0,25% o el 0,50%, se definió tras consultar con las áreas de riesgo, financiero y jurídico. Riesgo confirmó que el IPC acumulado era del 0,22% y Financiero verificó la disponibilidad presupuestaria de hasta un 1% proyectado. Jurídico aseguró que no existían restricciones legales ni problemas de discriminación en aplicar un ajuste diferenciado para ciertas categorías de plazas, particularmente las inferiores al nivel 19, con el fin de otorgar un incentivo adicional.

Detalla que estas plazas, correspondientes principalmente al personal en áreas de negocio, se beneficiaron del ajuste escalonado como parte de una política que busca reconocer su esfuerzo.

Comenta sobre la proyección de ingresos para el próximo año, señalando que ya estaba contemplado un posible aumento del 1% para el presente año. Explica que el impacto en la planilla ya se había sensibilizado en las proyecciones, dado que estas incluyen cálculos preventivos. Sin embargo, como el ajuste no se había formalizado previamente, no se había presentado aún. Añade que la planilla ya incorpora el efecto potencial de un posible ajuste salarial del 1% proyectado para el próximo año. En términos prácticos, explica que, para un

empleado con un salario de ₡1.000.000, un incremento del 0,25% representaría ₡2.500 adicionales al mes, menos las deducciones por renta.

La directora Sra. Palomo Leitón pregunta sobre el período del retroactivo, específicamente cuántos meses abarca.

La directora corporativa a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas responde que el retroactivo corresponde a seis meses, desde el 1 de julio hasta diciembre.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja agradece.

La directora corporativa a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas añade que el monto total sería de aproximadamente ₡13.000 colones por ₡1.000.000.

La directora Sra. Palomo Leitón señala que el año pasado no se aplicó el ajuste salarial a la clase gerencial, mientras que este año sí se está aplicando. Afirma que esta es la posición de la Administración.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja interviene mencionando que este punto ya había sido señalado anteriormente.

El director Sr. Espinoza Guido toma la palabra para referirse a un comentario realizado el día anterior por la gerente general corporativa, en el que aparentemente se mencionaba que el 0,25% de incremento aplicaba a todo el personal, incluyendo la clase gerencial.

La directora corporativa a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas confirma que el ajuste es del 0,25% más un 0,25% adicional para las categorías comprendidas entre los niveles 1 y 19. Esto significa que dichas categorías recibirán un total del 0,50% de incremento.

El director Sr. Espinoza Guido manifiesta confusión al respecto.

La directora corporativa a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas aclara que el ajuste del 0,25% corresponde al IPC, que equivale a un 0,22% pero que, por recomendación, se redondeó a un 0,25% para todas las categorías. Mientras que las categorías del nivel 1 al 19 recibirán un incremento adicional del 0,25%, resultando en un total del 0,50% de incremento.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja dice que entiende que es la diferencia entre el 0,22% del IPC y el 0,25%.

La directora corporativa a. i. de Capital Humano Sra. Goyez Rojas reitera que el ajuste del 0,25% es general para todos los colaboradores, mientras que las categorías del nivel 1 al 19 recibirán un incremento adicional del 0,25%, alcanzando un total del 0,50%. Estas categorías son las que ganan menos.

La directora Sra. Palomo Leitón menciona que, en las negociaciones, el sindicato inicialmente solicitó un incremento del 1%, pero como resultado de las conversaciones se llegó a un punto intermedio de 0,50%.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja indica que la propuesta de acuerdo es la siguiente:

1. Aprobar un ajuste salarial escalonado por categorías para el segundo semestre del 2024, retroactivo al primero de julio 2024, para todo el colectivo del Banco Popular, con el fin de compensar el aumento del nivel general de precios durante el primer semestre del 2024, de la siguiente manera:

- a. De la categoría 01 a la categoría 19: 0,50% de aumento*
- b. De la categoría 20 en adelante: 0,25% de aumento*

Este ajuste es extensivo a la Clase Gerencial ya que el último aumento aprobado para las posiciones que la conforman fue desde el I semestre de 2022.

Se autoriza a la Gerencia General Corporativa a gestionar la dotación de recursos por modificación interna que permita brindar contenido presupuestario al aumento salarial.

En el caso de las sociedades anónimas, la propuesta de ajuste debe valorarse a la luz del comportamiento de cada industria, considerando las posibilidades financieras de cada una de las subsidiarias y no podrá ser superior al porcentaje aprobado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

El director Sr. Espinoza Guido expresa que votará de acuerdo y en firme. Sin embargo, menciona que tiene algunas inquietudes que preferiría abordar posteriormente, para evitar generar más problemas en el momento.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con la propuesta.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“1. Aprobar un ajuste salarial escalonado por categorías para el segundo semestre del 2024, retroactivo al primero de julio 2024, para todo el colectivo del Banco Popular, con el fin de compensar el aumento del nivel general de precios durante el primer semestre del 2024, de la siguiente manera:

- a. De la categoría 01 a la categoría 19: 0,50% de aumento
- b. De la categoría 20 en adelante: 0,25% de aumento

2. Este ajuste es extensivo a la Clase Gerencial ya que el último aumento aprobado para las posiciones que la conforman fue desde el I semestre de 2022.

3. Se autoriza a la Gerencia General Corporativa a gestionar la dotación de recursos por modificación interna que permita brindar contenido presupuestario al aumento salarial.

4. En el caso de las sociedades anónimas, la propuesta de ajuste debe valorarse a la luz del comportamiento de cada industria, considerando las posibilidades financieras de cada una de las subsidiarias y no podrá ser superior al porcentaje aprobado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal”. (1322)

ACUERDO FIRME.

Al ser las **ocho horas con cincuenta y un minutos** finalizan su participación virtual la directora corporativa a. i. de Capital Humano Sra. Silvia Goyez Rojas y el jefe de la División de Contabilidad Analítica Sr. Esteban Meza Bonilla.

ARTÍCULO 22

8.5.1.- El Sr. Ricardo Azofeifa Castillo, director jurídico corporativo, se refiere al oficio DIRJC-1222-2024 dirigido a la Sra. Daliana Redondo Cordero, gerente general de Popular Fondos de Inversión, en relación con los alcances y responsabilidades en relación con el criterio emitido por la Procuraduría General de la República sobre la responsabilidad de la controladora y su incidencia en las subsidiarias. (Ref.: Oficio DIRJC-1222-2024)

El director Jurídico corporativo Sr. Azofeifa Castillo dice que el motivo de este tema es una consulta realizada por la Junta Directiva de Popular SAFI en relación con un dictamen emitido por la Procuraduría General de la República. El tema aborda la responsabilidad de las controladoras y su incidencia en las subsidiarias, en este caso el Banco de Costa Rica. La pregunta central planteada es si el Banco de Costa Rica, como controladora, es solidariamente responsable por las deudas y las situaciones de su SAFI o de las subsidiarias en general.

Explica que el análisis de la Procuraduría se centra en establecer una distinción entre la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria. Aunque el dictamen no desarrolla este aspecto con total detalle, considera crucial entender esta diferencia.

Para abordar la responsabilidad solidaria y la subsidiaria, es fundamental entender que implica la existencia de más de un deudor. Estas obligaciones son responsabilidades jurídicas de naturaleza patrimonial, en las cuales los deudores están obligados a cumplir con un deber de hacer, dar o no hacer, ya sea en virtud de un contrato o de lo que la ley disponga. Estas responsabilidades representan una situación jurídica que puede colocar a los deudores en una posición de desventaja frente al acreedor.

La responsabilidad solidaria se entiende como el derecho que tiene un acreedor de elegir entre varios deudores al mayor. En la relación entre los deudores y el acreedor, cada deudor está obligado a cumplir de forma íntegra con la obligación y puede ser demandado por la totalidad de la deuda. Es decir, si hay cinco, tres o dos deudores, el acreedor puede dirigirse a cualquiera de ellos como responsable del 100% de la deuda. Posteriormente, entre los deudores, se definirán las responsabilidades individuales, pero frente al acreedor, todos son considerados responsables de la totalidad de la obligación.

En contraposición, la responsabilidad subsidiaria, que es la que se asigna a la controladora del Conglomerado financiero, funciona de manera secundaria o escalonada. En este caso, antes de que el acreedor pueda dirigirse al responsable subsidiario, debe agotar todos los trámites

de cobro contra el deudor principal. Solo si el deudor principal no puede hacer frente a la totalidad de la obligación, se puede proceder contra el deudor subsidiario.

El Código Civil extiende esta figura a maestros, personas, entidades, organismos y empresas dedicadas a diversas industrias y regula esta responsabilidad como de carácter civil. Este tipo de obligación solo se activa después de que se han agotado todos los medios legales de cobro contra el deudor principal.

La Procuraduría General de la República realiza un análisis detallado sobre este tema, revisando normativas como la SUGEF 16-22 de las exposiciones de motivos y entrevistas en la Asamblea Legislativa. Este análisis tiene como objetivo entender la supervisión consolidada y las responsabilidades asignadas a las entidades controladoras. Entre estas responsabilidades destacan revisar el capital, reponer el capital de las sociedades y vigilar la consolidación financiera de todo el Conglomerado.

Indica que la responsabilidad que tiene la controladora no es la típica tradicional del derecho societario, pues se rompe el tema societario comercial básico, donde los socios o accionistas responden hasta el monto de sus aportes de capital. Según este principio básico, el Banco, como accionista del 100% de las sociedades, no debería asumir deudas más allá del capital aportado.

Sin embargo, esta regla se rompe con la responsabilidad subsidiaria. En este caso, si una persona es socia o accionista de una sociedad que tiene deudas, esta pierde únicamente sus aportes de capital. No obstante, no se le exige aportar más allá de lo invertido originalmente en la sociedad.

El análisis se centra en la interpretación de la Procuraduría, que considera que los bancos públicos, en calidad de entidades controladoras de un Conglomerado financiero, son subsidiaria e ilimitadamente responsables por las obligaciones asumidas por cada una de las entidades y empresas integrantes del Conglomerado financiero en el país, incluso por aquellas contraídas antes de la integración del grupo.

Se plantea un ejemplo en el que, si se adquiere o fusiona una sociedad, la entidad controladora asume una responsabilidad solidaria e ilimitada respecto a las sociedades que se incorporen posteriormente al Conglomerado financiero.

En este punto, hay una interpretación extensiva de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la normativa prudencial, las cuales indican que los grupos financieros en la sociedad controladora es subsidiariamente responsable. Se aclara que esta normativa está diseñada para aplicarse a grupos financieros y la diferencia entre un grupo financiero y un Conglomerado financiero radica en el carácter privado o público de las entidades. Sin embargo, la Procuraduría argumenta que esta distinción no puede limitarse únicamente a los privados. Según su análisis, la normativa utiliza los términos "grupo" y "conglomerado" de manera indistinta, salvo en casos muy específicos.

La Procuraduría concluye que no es posible interpretar que la responsabilidad subsidiaria se limite a las controladoras de grupos financieros privados. Considera que debe extenderse también a los bancos públicos, lo que implica una innovación o una reinterpretación de la ley que hoy solo indica expresamente solo para grupos financieros privados.

Se explica que esta interpretación significa que, si una sociedad perteneciente al Conglomerado financiero del Banco Popular no puede cumplir con sus obligaciones frente a terceros, el Banco Popular responderá con cargo en su patrimonio de manera subsidiaria, pero no solidaria. Esto implica que, en primer lugar, la sociedad deudora debe cumplir con sus obligaciones con cargo a su patrimonio. Si este resulta insuficiente, la responsabilidad pasa de forma escalonada al Banco Popular como entidad controladora, que utilizará su propio patrimonio para cubrir las deudas pendientes.

Se establece que este tema es de gran importancia debido a la falta de claridad en la normativa, ya que existían dudas, incluso a partir de todas normas, especialmente en relación con la supervisión consolidada. La principal inquietud era determinar qué tipo de responsabilidad aplicaba en este contexto.

Ahora queda claro que no se trata de una responsabilidad solidaria. Se confirma que, en el caso de las deudas de una sociedad integrante del Conglomerado financiero, no es posible dirigirse directamente contra el Banco Popular. Antes, deben agotarse las gestiones de cobro contra cada una de las sociedades implicadas, en relación con sus propias responsabilidades.

Además, se destaca un aspecto relevante: esta responsabilidad no opera en sentido inverso. Es decir, las sociedades integrantes del Conglomerado no son subsidiariamente responsables por problemas financieros de la controladora, en este caso, el Banco Popular. En un escenario extremo en el que el Banco no pueda cumplir con sus obligaciones, no es posible reclamar a las sociedades del Conglomerado. La responsabilidad es unidireccional, de las sociedades hacia la controladora, pero no al revés.

Asimismo, se aclara que esta responsabilidad no es aplicable entre las sociedades del Conglomerado. Por ejemplo, no es posible que una situación financiera adversa en la SAFI permita reclamar al Banco Popular, ni que las obligaciones de la SAFI se extiendan al Puesto de Bolsa o a la Correduría. La responsabilidad se limita estrictamente a la relación de la sociedad incumplidora con la controladora.

El dictamen, conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tiene carácter vinculante para la entidad consultante, en este caso, el Banco de Costa Rica. Además, actúa como jurisprudencia administrativa para el resto de la administración pública. Esto significa que no puede ignorarse lo señalado en este dictamen. Es importante subrayar que el Tribunal Contencioso Administrativo otorga gran peso a los precedentes y dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República.

De manera que es un tema que deben tener presente y que impacta de una manera considerable, pues este dictamen aborda un vacío legal que no era tan claro, ya que la ley hacía referencia únicamente a grupos financieros, cuya definición se orienta principalmente a entidades privadas. Ahora, con este pronunciamiento, se establece que las disposiciones aplican tanto a grupos financieros como a conglomerados, abarcando así a los tres bancos públicos del país.

El vicepresidente Sr. Navarro Ceciliano lee la propuesta de acuerdo:

Dar por conocido el oficio DIRJC-1222-2024 mediante el cual Sr. Ricardo Azofeifa Castillo, director jurídico corporativo, se refiere al oficio DIRJC-1222-2024 dirigido a la Sra. Dalianela Redondo Cordero, gerente general de Popular Fondos de Inversión, en relación con los alcances y responsabilidades en relación con el criterio emitido por la Procuraduría General de la República sobre la responsabilidad de la controladora y su incidencia en las subsidiarias.

Lo anterior, de conformidad con el acuerdo JDSAFI-702-Acd-569-2024-Art-12.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con la propuesta.

Al respecto, la Junta Directiva acuerda por unanimidad:

“Dar por conocido el oficio DIRJC-1222-2024 mediante el cual Sr. Ricardo Azofeifa Castillo, director jurídico corporativo, se refiere al oficio DIRJC-1222-2024 dirigido a la Sra. Dalianela Redondo Cordero, gerente general de Popular Fondos de Inversión, en relación con los alcances y responsabilidades en relación con el criterio emitido por la Procuraduría General de la República sobre la responsabilidad de la controladora y su incidencia en las subsidiarias.

Lo anterior, de conformidad con el acuerdo JDSAFI-702-Acd-569-2024-Art-12”. (1323)

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 23

9.- Asuntos Varios.

La directora Sra. Palomo Leiton solicita la posibilidad de cambiar la hora de la sesión de Junta programada para el miércoles 11 de diciembre.

Aclara que la propuesta es realizar la reunión el miércoles a las 7:00 a. m. de manera virtual y en caso de que se desee realizar alguna presencial, sería la del martes.

La directora Sra. Palomo Leiton especifica que la reunión del martes sería a las 16:30 horas y la del miércoles, a las 7:00 a.m.

El presidente Sr. Sánchez Sibaja sugiere realizar el cambio y señala que el jueves también sería a las 7:00 a. m., como esta semana.

La directora Sra. Palomo Leiton agradece el cambio, destacando que es la primera vez que lo solicita.

Todos los directores manifiestan estar de acuerdo con el cambio.

Al ser las **NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS** finaliza la sesión.

Sr. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja
Presidente

Sr. Juan Luis León Blanco
Secretario General